

**Palabras del Secretario General de FELABAN, señor Giorgio Trettenero Castro, en el 4 Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, COPLAFT**

**Antigua, Guatemala, 22 de septiembre de 2025**

Licenciado Enrique Rodríguez Mahr, Presidente, Asociación Bancaria de Guatemala, licenciado Juan Carlos Monroy, Intendente de Verificación Especial Superintendencia de Bancos de Guatemala, Señor Raúl Guizado, Presidente de FELABAN, gracias por apoyarnos en transmitir tu experiencia en estos importantes temas con el AML , señora Lidia Ureña, Presidenta del Comité Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, COPLAFT.

Señores miembros del Comité COPLAFT, distinguidas autoridades, estimados banqueros, representantes de organismos multilaterales, conferencistas, patrocinadores, señoras y señores:

Reciban un cordial saludo. Es para mí un verdadero honor y una profunda satisfacción dirigirme a ustedes en esta ceremonia inaugural del 4º Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – COPLAFT, que hoy nos reúne en la encantadora ciudad de Antigua, Guatemala, maravilloso lugar que nos ha recibido con su habitual hospitalidad y calidez.

Quiero expresar un agradecimiento muy especial al equipo de trabajo y a las autoridades de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y su Escuela Bancaria, así como al Comité COPLAFT, por haber construido junto a la Secretaría General de FELABAN este valioso espacio de encuentro, en el que abordaremos temas de gran relevancia y actualidad para nuestra región.

Hoy más que nunca, es necesario reafirmar que no existe desarrollo económico posible sin estabilidad institucional, sin una democracia sólida y creíble, sin seguridad jurídica y sin un entorno seguro, libre de criminalidad y de actividades ilícitas.

Estos son los pilares fundamentales sobre los cuales nuestras naciones pueden construir prosperidad, inclusión y justicia. Solo en un ambiente de legalidad, confianza y seguridad, sustentado en instituciones sólidas, en el estado de derecho y en el respeto a los principios democráticos, es posible generar las condiciones necesarias para un crecimiento sostenible, equitativo y duradero.

Sin embargo, como lo muestran los datos más recientes, la región atraviesa un momento especialmente delicado. América Latina y el Caribe concentra casi el 9% de la población mundial pero padece más del 30% de los homicidios, lo cual significa que tan solo en 2024, más de 121.000 personas fueron asesinadas en nuestra región. Siete de los diez países con las tasas más altas de homicidio en el mundo están en esta parte del continente. Además, 42 de las 50 ciudades más violentas del planeta se localizan en Latinoamérica. Las tasas de violencia, inseguridad y victimización superan por mucho los promedios internacionales. Esta realidad está íntimamente ligada a la expansión del crimen organizado, el debilitamiento de las instituciones y la fragilidad del Estado de Derecho.

Según un informe de 2024 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gasto público para combatir el crimen oscila entre el 3 y el 3,5% del PIB en 17 países de la región. El FMI señala que reducir la tasa de homicidios en América Latina al promedio mundial aumentaría el crecimiento anual en un 0,5%. Ello porque los costos directos de la delincuencia alcanzan el 3,4% del PIB

latinoamericano, un 78% del presupuesto de educación, el doble de lo destinado a asistencia social y 12 veces el gasto en investigación y desarrollo.

Esta inseguridad y violencia, que ya se han vuelto fenómenos estructurales en América Latina, no solo ponen en riesgo la integridad de la población, sino que constituyen una amenaza directa para la institucionalidad, la democracia y sus pilares fundamentales. A su vez, el debilitamiento de las instituciones y de los principios democráticos, junto con altos niveles de polarización política y conflictividad social, dificultan seriamente una respuesta efectiva frente a los desafíos en materia de seguridad. Se configura así un círculo perverso, en el que las principales beneficiadas son las organizaciones criminales, mientras los ciudadanos del común continúan siendo los principales afectados.

Por ello la percepción ciudadana de la democracia y las cifras disponibles reflejan con claridad que atravesamos una coyuntura especialmente crítica. En la actualidad, el 65 % de la población se declara insatisfecha con los resultados que ofrece la democracia, y un 40 % considera que esta podría funcionar incluso sin partidos políticos, sin parlamento ni oposición.

En este complejo panorama, es absolutamente crucial fortalecer nuestras instituciones y defender con firmeza tanto la democracia como la seguridad y el Estado de Derecho. La violencia, la corrupción y la expansión del crimen organizado no solo amenazan la seguridad ciudadana, sino que socavan las estructuras que sostienen la legalidad, la justicia y la gobernabilidad democrática en nuestra región.

Es fundamental subrayar que la responsabilidad primaria en esta tarea recae en el Estado. Es el Estado quien tiene el deber constitucional y legítimo de garantizar la seguridad, hacer

cumplir la ley, proteger los derechos de la ciudadanía, preservar el orden democrático y la integridad y ética de sus instituciones, evitando y reprimiendo los actos de corrupción estatal. Son las instituciones públicas las llamadas a liderar este esfuerzo, a través de políticas coherentes, marcos normativos sólidos, sistemas judiciales independientes y fuerzas de seguridad profesionales y eficientes.

Sin embargo, la respuesta no puede ser exclusivamente pública ni reactiva. El rol de la banca y en general del sector privado es más relevante que nunca. Además de su colaboración con las autoridades en su papel en la prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción, que ha venido cumpliendo con responsabilidad y eficiencia, es fundamental que el sector privado continúe fortaleciendo su compromiso con el cumplimiento normativo, la integridad, la ética corporativa y la transparencia, en todos los niveles de la organización, empezando desde la alta dirección. Esto no solo protege la reputación y sostenibilidad empresarial, sino que fortalece significativamente el entorno democrático e institucional en el que la opera la entidad. Así mismo, es absolutamente crucial buscar nuevos y más eficientes mecanismos de colaboración entre el sector público y privado en la prevención y el control del lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT), para cerrar de manera más eficaz los canales financieros que permiten a las organizaciones criminales operar, crecer y fortalecerse.

Pero también todos los ciudadanos del común tenemos un deber que asumir. Nuestra responsabilidad no se limita al cumplimiento de la ley, sino que se extiende al ejercicio de una ciudadanía activa, basada en la ética pública y privada, la participación informada y la vigilancia constante de quienes ejercen el poder. La responsabilidad política y ciudadana implica involucrarse en los asuntos públicos, exigir rendición

de cuentas y contribuir, desde cada ámbito, al fortalecimiento institucional y a la legitimidad democrática.

Es absolutamente perentorio superar estas dificultades si realmente queremos encaminarnos por la senda del desarrollo, el crecimiento y la superación de la pobreza. Al analizar el comportamiento del crecimiento regional, observé que hace apenas 10 o 15 años nuestra región se ubicaba en el tercer lugar a nivel mundial —detrás del G20 y el Sudeste Asiático— en términos de crecimiento. En ese período también logramos una reducción significativa en los niveles de pobreza y pobreza extrema.

Sin embargo, en la última década hemos retrocedido de forma preocupante. Hoy nos encontramos en los últimos lugares a nivel global, incluso por debajo de África subsahariana. Las brechas entre los ingresos per cápita de nuestros países y los de las economías desarrolladas se han ampliado, y seguimos repitiendo un patrón que data de hace más de 500 años: exportamos productos básicos con escaso valor agregado, mientras importamos tecnología, servicios, automóviles y dispositivos móviles con alto valor agregado. Esta dinámica representa una pérdida significativa en términos de valor de intercambio.

En América Latina representamos menos del 7% del mercado mundial, y apenas el 3,5% si excluimos a Brasil. Si realmente aspiramos a cerrar esta brecha, además de resolver los desafíos de seguridad, institucionalidad y democracia, debemos enfocarnos en generar valor agregado, en unificar mercados, y en aumentar de manera sustancial la inversión en innovación y tecnología. Actualmente, esta inversión representa apenas el 0,2% del PIB en la región, mientras que en países como Corea del Sur alcanza niveles diez veces superiores.

Asimismo, es fundamental formar y retener talento, establecer reglas claras y definir hacia dónde queremos llegar en los próximos 10, 15 o 20 años, todo ello sustentado en competitividad, estabilidad jurídica, estado de derecho e instituciones sólidas. En la actualidad, enfrentamos una fuerte polarización política y ciclos gubernamentales de apenas 4 o 5 años, en los cuales frecuentemente se desechan los avances del gobierno anterior, especialmente si proviene de una corriente política diferente. Esto impide la construcción de políticas de largo plazo.

Por ello, es imprescindible alcanzar acuerdos nacionales que definan una hoja de ruta a largo plazo, independientemente del presidente o partido político que esté en el poder. Deberíamos establecer indicadores que se mantengan como prioridad permanente, enfocados en áreas clave como seguridad, innovación y tecnología, productividad, inversión, infraestructura, empleo, crecimiento del valor agregado de nuestros productos, comercio intrarregional —hoy muy bajo en nuestra región— y el desarrollo de ventajas competitivas que impulsen una verdadera industria, comercio y servicios generadores de valor.

Todo lo anterior, como ya he señalado, es absolutamente crucial si queremos superar de manera definitiva el subdesarrollo.

De no actuar en esta dirección, las brechas que enfrentamos hoy no harán más que seguir creciendo.

Nuevamente, aprovecho esta oportunidad para reiterarles mi más cordial bienvenida a este importante evento. Estoy convencido de que las conferencias y discusiones que tendremos en este espacio serán sumamente provechosas para todos nosotros. Damos por inaugurado este congreso

Muchas gracias,